



La Guardia Civil, en las tierras de As Encrobas: la amenaza de ocupación ha movilizó a todo el pueblo.

dustrializar Galicia" y suplir el "déficit" que ya presenta entre consumo y producción de energía eléctrica. Para todo esto se ha intentado, a lo largo de meses, la compra de los terrenos a los vecinos de As Encrobas a precios irrisorios, eludiendo otras responsabilidades. Los campesinos han pedido mejores precios —a cambio de perder sus tierras y sus medios de vida—, y han exigido que se les traslade el pueblo a un lugar de similares condiciones. El desenlace del desprecio de Lignitos y de la firme postura de los vecinos han sido la toma de los terrenos de parte de la fuerza pública y contra la resistencia dramática de sus legítimos dueños, al intentar aplicarse la ocupación.

Numerosos pueblos de la provincia de La Coruña aún no tienen luz; la energía que se produciría esquilmando los recursos de todo el pueblo gallego alimentará las fábricas del capitalismo autóctono o no, que a su vez sistematiza el expolio de la tierra, el mar y el paisaje de Galicia. La colonización descarada

—como señalan la mayoría de los comunicados hechos públicos por grupos políticos y entidades populares, con este motivo— no va orientada al desarrollo auténtico, sino al hundimiento progresivo del pueblo gallego. El caso del asalto a As Encrobas, como culminación de la torpe política arrastrada por Fenosa respecto a Galicia, no va a quedar en una humillación más. Xeito Democrático advierte que los hechos de As Encrobas "reavivan las profundas heridas existentes" en lugar de invitar a la convivencia democrática. La entidad cultural O Facho denuncia que se presente a la opinión pública como bien social lo que es "sencillamente un negocio privado".

Comunicados de condena, paros y manifestaciones de solidaridad están avivando la conciencia de secular humillación del campesino gallego; esta provocación salvaje e inoportuna no tardará en volverse en contra del grupo Fenosa, que tanta animadversión se ha ganado en los últimos años.

Toda esta situación, de por sí tensa, se ha agravado al límite con la muerte, el viernes 18, de un joven estudiante de la Universidad Laboral de La Coruña en el instante en que intentaba colocar en el tejado de uno de los pabellones del centro una pancarta de solidaridad con los campesinos. El muchacho, que acababa de salir de un encierro junto con otros cincuenta compañeros en la capilla de la Universidad, recibió la descarga mortal de un cable de 15.000 voltios que cruza las instalaciones del centro. Parece ser que el propio director de la Universidad Laboral había solicitado repetidamente de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A. (Fenosa) que retirara ese cable eléctrico.

El nuevo elemento de peso en el conflicto radica en la intervención del arzobispo de Santiago, que, recién llegado de Roma e impresionado por la muerte del muchacho, declaró que todo podía haberse evitado si se hubieran tenido en cuenta sus objeciones expuestas oportunamente ante las autoridades. Don Angel Suquía recomendó nue-

vamente el recurso al diálogo entre todas las partes e insistió en que no debían valorarse exclusivamente los aspectos económicos y materiales, sino también los afectivos y humanos.

Mientras el cuerpo del joven estudiante era trasladado a su pueblo natal de León, en La Coruña oficiaba un funeral el párroco de Sésamo, don Ramón Valcárcel, que aca-

baba de ser puesto en libertad tras su retención por solidarizarse con los campesinos de As Encrobas.

La presión popular en forma de manifestaciones de solidaridad habidas en distintos lugares de Galicia durante todo el fin de semana, ha llevado, por el momento, a la congelación de las medidas expropiadoras y al inicio de negociaciones. ■ PEDRO COSTA MORATA.

MEDIDAS ECONOMICAS

El Gobierno no se decide

LARGAS colas de vehículos esperaban turno en las gasolineras: se decía que la súper iba a subir dos o tres pesetas por litro. El "Telediarlo" de las ocho y media registró una inusitada audiencia. Se esperaban decisiones importantes y se esperaban ansiosamente: desde hace algunos meses es cada vez más claro que la economía ha dejado de ser una preocupación de especialistas. Pues bien, una vez más, la justa ansiedad de treinta y cinco millones de personas se vio frustrada: el Consejo de Ministros del viernes 18 de febrero, de donde hablan de salir unas medidas económicas para hacer frente a la crisis, estuvo reunido diez horas y no dio ninguna solución. Y un sorprendente aplazamiento fue lo único que se pudo sacar en claro.

No se ponen de acuerdo los señores ministros. No saben qué hacer. O a lo mejor es que no pueden hacer nada. Cinco reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, diez horas de Consejo de Ministros, más algunas horas ocupadas por el tema en anteriores Consejos, no han servido sino para dar, con toda la pomposidad habitual, unas líneas generales de manual de segundo de Económicas. Y a esperar al martes.

Es para ponerse a llorar. Llevamos meses escuchando severas premoniciones, desde todos los lados y opiniones políticas, de que la crisis económica es tan grave que podría paralizar el proceso político, de que es necesario un pacto previo a las elecciones, de que a lo mejor es necesario adelantar la consulta electoral debido a la crisis... Alguien, y no sólo Lassuén, ha llegado a proponer Gobiernos de salvación nacional para hacer frente al tema.

Reactivación moderada, crecimiento del producto interior bruto del 3,5 por 100: en ese tema, y a duras penas según parece, el Gobierno se ha puesto de acuerdo. No era para menos, habida cuenta de las necesidades del período pre-electoral. Los más elementales manuales de política enseñan que en etapas como ésta no se pueden proponer férreos programas de

austeridad. Y aunque algunos ministros no se mostraran partidarios de tamañas euforias, entre ellos parece ser que el titular de Hacienda, al final esta línea se ha impuesto. No es, desde luego, para echar las campanas al vuelo: ese 3,5 es exactamente la mitad de la media del ritmo de crecimiento de los últimos años de prosperidad anteriores a la crisis, superior tan solo en 1,5 puntos a lo logrado en 1976; y es inferior en más de un punto a la media prevista para 1977 en los países de la OCDE.

El Gobierno ha aprobado un cuadro macroeconómico cuyos capítulos fundamentales se desconocen: no se sabe qué previsiones ha hecho para el consumo privado, ni para el consumo público, ni para las importaciones. Tan solo se menciona que la formación bruta de capital crecerá un 3 por 100 y que las exportaciones lo harán en un 6 por 100. Lo demás es secreto. Como también lo es una columna fundamental que suele aparecer en todos estos cuadros macroeconómicos: la previsión del crecimiento de los precios en cada uno de los capítulos. Y, en este caso, lo más interesante sería saber a costa de qué elevación de los precios al consumo se va a conseguir ese 3,5 por ciento de crecimiento del producto interior bruto. Los más optimistas no bajan del 20 por 100 y, como ya citamos en anteriores ocasiones en TRIUNFO, algunas empresas multinacionales han hecho sus cálculos pensando en por lo menos un 25 por 100. Eso explicaría el silencio del Gobierno al respecto.

Tras plantear un cuadro macroeconómico, al que le faltan tres patas de cinco, el Gobierno anuncia "sus" medidas:

Sector público: Inversión adicional de 50.000 millones de pesetas (por encima de las cantidades incluidas en un presupuesto aprobado hace menos de un mes) y crecimiento del crédito oficial en un 25 por 100 respecto a las cantidades de 1976. Esa es una de las pocas decisiones cuantificadas en el programa del Gobierno, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿de dónde van a salir esos 50.000 millones, que tampoco es una cantidad como



La batalla del índice

para volverse loco? Dos recursos tiene el Gobierno: el Banco de España, tradicional sufragador del déficit del sector público, con un inevitable aumento de la inflación, o los préstamos exteriores, elevando nuestro endeudamiento. Si éste, como parece, fuera el camino escogido, serían muy probablemente los árabes quienes nos prestaran el dinero.

Sistema financiero: La única "decisión" adoptada en este terreno es la flexibilización de los tipos de interés para, según se dice, fomentar el ahorro y favorecer la inversión. Hablando a corto plazo, no cabe mayor contradicción; porque favorecer el ahorro supone flexibilizar hacia arriba los tipos, mientras que apoyar la inversión presupone exactamente lo contrario: rebajarlos y abaratar el dinero. Es una muestra más de que en los temas que podrían ser importantes el Gobierno no se había puesto de acuerdo hasta el viernes por la noche. Esperemos que el martes ya se hayan aclarado en este y otros extremos.

Sistema fiscal: Ligeros "retosques", esta es la palabra empleada, con ánimo recaudatorio; es decir, para elevar los ingresos del exíguo Tesoro Público, y una sorprendente iniciativa: "someter a consulta de organismos, entidades, corporaciones y partidos políticos" los estudios realizados para elaborar un proyecto definitivo de reforma fiscal. Dos preguntas caben hacerse al respecto. ¿De qué proyecto se está hablando? ¿De aquel proyecto realizado por Fuentes Quintana en el Instituto de Estudios Fiscales y que, tras la "revisión" de Villar Mir, iba a ser presentado en las Cortes en el pasado mes de julio? Es decir, ¿de un proyecto que el actual Gobierno archivó nada más llegar al poder? ¿O de otro proyecto de cuyos trabajos previos no se tienen noticias? Pero, además, ¿qué clase de partidos políticos van a ser consultados, por no hablar de las instituciones, que ya sabemos cuáles son? ¿Los de la izquierda legalizada, que lo único que tendrán que objetar es que sea poco? ¿Los del centro, que ya se han pronunciado por avances serios en esta materia? Mucho nos tememos que la consulta vaya dirigida precisamente a aquellas formaciones que se oponen, como se han venido oponiendo en los últimos años desde los bancos de las Cortes, a cualquier mejora en el terreno fiscal. A Alianza Popular y similares. Y si éstos son los consultados y los llamados, pocas esperanzas cabe abrigan.

Tras estos tres apartados, que no lo son debido a tantas incongruencias, se entra ya en el terreno de la vaguedad absoluta al formular una política de fomento de la exportación, de relaciones laborales —se habla en estos momentos de que podría volverse al suspendido artículo 35, suspendido por este mismo Gobierno hace cinco meses;

de que se regularía nuevamente la huelga, pero que, al tiempo, se podrían modificar las normas de flexibilización de plantillas, para permitir una mayor libertad de despido por parte empresarial— y de política industrial, eliminando probablemente algunas trabas existentes para la instalación de nuevas empresas y ampliación de las existentes.

Al parecer se está librando la batalla sobre la devaluación de la peseta o el aumento de los márgenes de flotación de la moneda que la acercasen a sus cotizaciones reales en los mercados monetarios, en donde desde primeros de marzo ha perdido cerca de un 8 por 100.

Así pues, el nuevo programa económico: una reactivación moderada (que luego se verá si se alcanza) a costa de una impresionante inflación y aborrida con medios reducidos (la inversión pública fundamentalmente), que aumentará nuestros problemas de dependencia exterior (vía endeudamiento). En resumidas palabras, esta es la línea básica de la política del Gobierno. Porque recurrir a la inversión privada en estos momentos, por mucho que se quiera jugar con los tipos de interés y con las normas de política industrial, no parece un camino que vaya a dar resultados: sigue estancada y lo va a seguir por lo menos hasta después de la normalización política, que no es lo mismo que hasta después de las elecciones.

Un diario de Madrid señalaba que el margen del Gobierno es escaso en la política económica, y es cierto. Sus acciones, de corta influencia, lo que obliga a modificarlas a los pocos meses, tienen escasa influencia en la coyuntura. La presión de "sus" obligaciones políticas contraen aún más esta posibilidad de acción. Lo increíble es su indecisión: no puede abordar un plan de austeridad "a lo Barre", como aconseja la derecha; ni puede reactivar en un momento de inestabilidad política como el actual, y menos sin contar con un consenso social, que también sería vital para actuar en la línea anterior.

La discusión sobre una devaluación de la peseta es indicador claro de lo que está ocurriendo: porque quienes piden una devaluación, o una racionalización de la paridad, exigen, con la lógica de sus intereses, un plan de austeridad, antinflacionario, que evite que los beneficios exportadores de la medida sean devorados por la subida de los precios. Quienes dicen no a la devaluación son quienes, interesados en presentarse con buena imagen a las elecciones, no quieren oír hablar de austeridades, aun cuando estén decididos a llevarlas a cabo con más rigor, y sea cual sea el consenso social, tras las elecciones. No es, por tanto, una batalla de buenos y malos. En definitiva: reactivación moderada, sí, pero otra muy, pero muy distinta. ■ CARLOS ELORDI.

VUELVAN ustedes a elaborar el índice del coste de la vida de enero, según el sistema antiguo. Algo así se decía en el telegrama que el pasado martes 15 de febrero envió a las delegaciones provinciales el director del Instituto Nacional de Estadística. Algo así le había aconsejado que hiciera el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio. Algo mucho más gordo habían pedido algunos ministros económicos, asustados de los resultados obtenidos con el nuevo sistema de cómputo en el mes de enero: una subida, se dice, del 3 por 100, que sería un record tras el registrado en el mes de mayo de 1976, el famoso 4,58 por 100.

El desmentido oficial a las noticias que circularon en este sentido fue total: no ha habido manejos y el índice se computará por el nuevo sistema de base 1974. Pero lo cierto es que entre la noticia y el desmentido han ocurrido algunas cosas que merece reseñar, algunas tensiones, y al más alto nivel, que explicarían el cambio de rumbo.

En 1974, el Instituto Nacional de Estadística, a instancias del Gobierno, inicia la elaboración de una encuesta de Presupuestos Familiares destinada a conocer los hábitos de consumo de los españoles con el fin de revisar las ponderaciones, el peso que los distintos artículos tenían en el índice del coste de la vida que se elaboraba sobre la base de lo que los españoles consumían en 1968.

El empeño era encomiable y los resultados de la encuesta, acabada a finales de 1974, fueron del máximo interés. Con ellos se establecieron unas nuevas ponderaciones, más realistas. Así, si la alimentación, bebidas y tabaco, que tenían un peso del 49,34 por 100 en el índice de 1968, pasaban a ser el 40,85 por 100 del de base 1974, el vestido y calzado, del 13,94 al 8,24. El alquiler de viviendas, del 7,95 al 5,01, introduciéndose el concepto de viviendas en propiedad, tan importante en los gastos de muchos españoles, que adquiría un peso del 9,10 por 100; se suprimían además los gastos de casa y los gastos diversos, creándose los capítulos de mobiliario y aparatos de hogar (con un 7,82 por 100), salud y sanidad (2,58), enseñanza, deportes, cultura y esparcimiento (con un 7,00), transportes y comunicaciones (9,83) y otros gastos (9,57).

1975 había de ser el año en que se recogieran los datos para el nuevo índice, el tiempo que se publicaban los del antiguo, con el fin de establecer la base, y en enero de 1976 habría entrado en vigor. En 1975 no se hizo absolutamente nada en este sentido y hubo que esperar a 1976 para empezar a recoger los datos. Por tanto, enero de

1977 habría de ser el primer mes de vigor del nuevo sistema de ponderaciones de la nueva base.

Se procedió para ello a una vigorización y reestructuración de las delegaciones provinciales del índice del coste de la vida, que tiene un equipo provincial de encuestadores para él solo. Se establecieron nuevas exigencias para los encuestadores y se aumentaron los controles. Todo estaba preparado. Se hicieron las comprobaciones de precios —los de los productos alimenticios se controlan cuatro veces al mes, y los de la mayor parte de los restantes, dos o tres— y se logró la cifra: un 3 por 100, más o menos.

Entonces ocurrió lo inesperado, aunque tal vez fuera presumible: un grupo de ministros económicos acudió al Ministerio de la Presidencia, de quien depende el INE, y exigió que el nuevo sistema se olvidara. Algunas fuentes indican que Osorio no estaba dispuesto a ceder. Ello, al parecer, fue evidente, cuando esos ministros, junto con el vicepresidente, se entrevistaron con el director del INE y le pidieron que en lugar de trabajar con el sistema nuevo o con el antiguo elaborara un índice con los 23 productos incluidos en la lista de vigilancia especial elaborada por el Gobierno en el mes de diciembre; es decir, con los productos que teóricamente, en la práctica es otra cosa, suben menos.

El director del INE señaló la imposibilidad técnica de elaborar este nuevo índice reducido y al gusto de los ministros. Osorio tedió y se negó también. Pero el telegrama que mencionábamos al principio fue expedido. La reacción de las delegaciones provinciales fue, por lo menos, de sorpresa. Cómo elaborar unos datos con un mes de retraso. ¿Qué pescadero se va acordar del precio de la merluza el 4 de enero si se lo preguntan el 15 de febrero?

Revelo hubo también en el Instituto: los funcionarios no estaban dispuestos a que se jugara con ellos: un año de trabajo había supuesto la Encuesta de Presupuestos Familiares, y se había gastado 80 millones de pesetas de 1974. Pero el cambio de actitud vino de las alturas: porque el propio Osorio parece decidido a emitir la orden que instituya las nuevas ponderaciones pese a quien pese. No está claro si ese pensamiento existía desde antes del encuentro con los ministros económicos o si surgió a la luz de la tensión creada: algunos señalan que las informaciones publicadas denunciando la cuestión no habrían sido mal vistas por el señor Osorio.

Lo cierto es que, por el momento, parece que el nuevo índice ha triunfado. Lo que no deja de ser aleccionador es el anecdótico de la cuestión. ■ C. E.